

La mentira de la Hacienda secesionista

FRANCISCO DE LA TORRE

Uno de los puntos críticos para cualquier nuevo Estado es la Hacienda, es decir, cómo se van a financiar los servicios públicos. De

hecho, toda la interminable campaña separatista en pro del referéndum ilegal se ha basado en el lamentable eslogan «Espanya ens roba». De aquí parecía deducirse que en una Cataluña independiente sobrarían los recursos para financiar un mayor gasto público. Esto era exactamente lo que prometían los partidarios del Brexit en la campaña del Referéndum de ruptura. Ahora, el Reino Unido está negociando cuántas decenas de miles de millones de euros tendrá que pagar a la Unión Europea para cumplir sus compromisos financieros.

Incluso sin tener en cuenta, ahora, si el eventual «déficit fiscal» (saqueo en la no-

menclatura nacionalista) bastaría o no para cubrir el brutal incremento de gastos del Nuevo Estado, queda la inevitable verdad de que los impuestos hay que cobrarlos. Por eso, la capacidad de construir una «Hacienda propia» capaz de cobrar todos los impuestos es una pieza clave del desafío separatista. Hace tres años, el propio Consell Asesor per la Transició Nacional reconocía que la Agencia Tributaria de Cataluña no tenía medios, infraestructura, ni mucho menos información para hacerse cargo de la gestión de los grandes impuestos estatales: IRPF, IVA, Impuesto de Sociedades y los impuestos especiales.

Las circunstancias no han cambiado en el apartado clave: la información. En este aspecto, la Generalitat no ha tenido nuevas vías legales relevantes de información. Sin embargo, el ex portavoz de ERC en el Senado, el juez suspendido Santiago Vidal, si reconocía que la Generalitat había obtenido información por vías ilegales. Más allá del nulo respeto que demuestra el separatismo por los derechos fundamentales, aunque fuesen reales las afirmaciones de Vidal, esto no demuestra ningún tipo de capacidad para garantizar un suministro continuo y fiable de información.

Este hecho supondría que algunos servi-

cios como el borrador de declaración del IRPF desaparecerían. Además, el fraude fiscal se dispararía. Por esa razón, el mencionado Consell Assessor de la Generalitat recomendaba fervientemente incrementar sustancialmente los plazos de prescripción, para poder cobrar en el futuro a los defraudadores, que se multiplicarían.

Por esa razón, uno de los objetivos fundamentales de los separatistas era conseguir «les Claus de la Plaça Letamendi», es decir, el control total de la Administración Tributaria del Estado en Cataluña. Además, uno de los pilares fundamentales de la nueva «República de Catalunya» sería una Ley de

Hacienda propia, que confiriere legalidad y legitimidad a los impuestos que tendría que exigir el nuevo Estado. Todo esto ha quedado en agua de borrajas, por la sencillísima razón de que no da tiempo antes del referéndum ilegal del próximo uno de octubre.

Ahora bien, todo esto es una estafa. Se les está prometiendo a los catalanes una Hacienda propia que no existe, y que no tiene capacidad, ni por supuesto legalidad y legitimidad para gestionar un sistema fiscal. Pensemos que se pretenden controlar con 700 empleados los impuestos del 20% de la economía española. Esto sería como gestionar con 3.500 empleados el sistema fiscal de

toda España. Pues bien, la Agencia Tributaria del Estado, una de las más reducidas de Europa, tiene 25.000 efectivos y ha habido que proceder a un Decreto Ley urgente, a instancias de Ciudadanos, para incrementar sus efectivos.

Los impuestos son pagos obligatorios,

Esta Hacienda no tiene capacidad, ni por supuesto legalidad y legitimidad

pero por encima de todo son pagos legales. Un pago coactivo no amparado en la legalidad tiene un nombre bastante feo, como también lo tiene la propia subversión del Estado de Derecho y la Democracia. Como en otros ámbitos, reflejados cristalinamente en el bodrio de la ley de transitoriedad, el golpe que pretenden los separatistas no sólo es antidemocrático, sino que está simplemente basado en mentiras, mentiras arriesgadas y costosas para todos.

Francisco de la Torre es diputado y responsable de Hacienda de Ciudadanos, además de [inspector de Hacienda](#).